

En ese mismo mes, enfurecidos por los planes que había en el sentido de crear una empresa de transportes del Estado, un grupo de camioneros inició una huelga en la sureña provincia de Aysén y, con ello, provocó la primera gran crisis de los años de la UP. El encarcelamiento de los dirigentes de la huelga precipitó una repentina y extendida ola de paros de trabajadores. Otros grupos, especialmente los tenderos y los dueños de pequeños negocios, se sumaron a la huelga solidarizándose con los primeros y agrupándose en gremios para defender sus intereses. Bajo una organización funcional, el Frente Nacional de Defensa (después conocido como el Comando Nacional de Defensa), apoyó con todas sus fuerzas a los camioneros. Se produjo así una movilización masiva a la cual se sumaron a la larga entre 600.000 y 700.000 personas, incluidos campesinos, marinos mercantes, doctores, abogados y otros profesionales. En el momento más álgido del paro, había más de 23.000 camiones en la carretera. Dada su función vital en el transporte de bienes, el país se encontró de pronto prácticamente paralizado.

La movilización opositora estuvo acompañada por la de los radicales de la UP, quienes respondieron tomando las fábricas cerradas por sus propietarios —como una manera de solidarizarse con los huelguistas—, incorporándolas a los «cordones industriales» ya existentes y creando otros nuevos. Ahora, los «cordones» establecían «comandos comunales» para encargarse de los aspectos económicos durante las huelgas. Estas organizaciones «paralelas» (y, en cierta medida, paramilitares) se volvieron cada vez más poderosas —a mediados de 1973 había una media docena de ellos en torno a Santiago—. Esto planteaba un angustioso dilema para el presidente Allende: ¿debía desalojar a los ocupantes? ¿debía apoyarlos? Fuera cual fuera la decisión, en ambos casos perdía.

Ansioso por restaurar el orden a tiempo para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el presidente intentó desesperadamente mitigar la monumental crisis nacional. Con ese fin, invitó al general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, a ocupar el cargo de ministro del Interior, al tiempo que ofrecía otras dos carteras a oficiales (2 de noviembre de 1972). Prats, masón como Allende, rápidamente se consolidó como una figura clave en una escena política cada vez más enfrentada. Rápidamente disolvió la huelga de los camioneros (noviembre de 1972), permitiendo así que se realizara la campaña para las elecciones parlamentarias en una atmósfera algo más tranquila. La importancia de esta elección era evidente. Si la oposición PDC-Nacional (ahora aliados formalmente en la «Confederación Democrática») obtenía una mayoría de dos tercios, esto le permitiría revocar los vetos presidenciales y poner en tela de juicio al presidente.

Dada la inflación, la escasez de alimentos, las largas colas de espera en las tiendas y el floreciente mercado negro, muchos observadores externos asumieron que la UP perdería estrepitosamente. Sin embargo, los allendistas siguieron siendo leales, aunque con cierta ironía —como rezaba un eslogan mural de la época—: «Es un gobierno de mierda, pero es el nuestro». La UP ganó el 44% de los votos, la oposición el 55%. En términos de

partidos, el PDC (29%) y los nacionales (21%) derrotaron a los socialistas (19%) y a los comunistas (16%). Esto tenía poca importancia: Allende estaba a salvo de la acusación constitucional. Las elecciones de 1973 suscitaron gran cantidad de hostiles acusaciones y contracusaciones de fraude electoral (por ejemplo, haber colocado votos en las urnas) y de una excesiva demora en anunciar los resultados —testimonio elocuente de la atmósfera de desconfianza que se había instalado para entonces entre el gobierno y la oposición—.

QUIEBRA Y TRAGEDIA

Quizá envalentonado por sus logros electorales, el gobierno procedió a introducir una nueva reforma educacional, la llamada Escuela Nacional Unificada (ENU). Esta medida, cuyo fin era entregar un mejor acceso a la educación, estaba concebida también para promover al «hombre nuevo», «libre para desarrollarse a cabalidad en una sociedad no capitalista y que se expresaría como una personalidad [...] consciente y solidaria con el proceso revolucionario, que sería capaz [...] de desarrollar técnica y científicamente la sociedad económica en su transición al socialismo»²⁴. Esto se lograría combinando los «valores chilenos tradicionales» con el reconocimiento de «las luchas proletarias en pro de la soberanía y la independencia que prácticamente han sido ignoradas por la enseñanza tradicional, que sirve a los intereses de clase de la oligarquía»²⁵.

La ENU logró sumar a la oposición a los grupos que hasta entonces se habían mantenido neutrales. Los obispos católicos se habían mostrado bastante tolerantes con el gobierno, pero ahora criticaban a la ENU por ignorar los «valores cristianos» y por usurpar el papel de los padres en la educación. La Iglesia pidió al gobierno que postergara el plan hasta que fuera debatido con más detalle. El clero no era el único que se oponía. Los padres de los niños en colegios privados también manifestaban sus objeciones. La ENU provocó demostraciones estudiantiles tanto a favor como en contra del proyecto; en una de ellas, un francotirador mató a un manifestante. Los políticos se sumaron al clamor: el PDC señaló que la medida era estrecha de miras y estaba mal concebida; los nacionales la describieron con más sensacionalismo como «lavado de cerebros». La izquierda denunció esta actitud como típica de una «ideología retrógrada y clasista, el egoísmo de este grupo privilegiado, su miopía intelectual y su defensa tan cerrada de los intereses de casta»²⁶.

Enfrentados a estas reacciones hostiles, Allende y su ministro de Educación, el radical Jorge Tapia, acordaron en abril de 1973 postergar la entrada en vigor de la ENU. No

²⁴ Joseph P. Farrell, *The National Unified School in Allende's Chile*, Vancouver, 1986, pág. 96.

²⁵ *Ibid.*, pág. 97.

²⁶ *La Nación*, 25 de abril de 1973, citado en Farrell, *The National Unified School*, pág. 222.